

**REMOZANDO LA DICTADURA
LA INVASIÓN ESTADOUNIDENSE DE HAITÍ EN 1994**

RAMÓN TRUJILLO MORALES

Hace unos años se representó en México una pieza teatral que mostraba a un grupo de indígenas americanos festejando la llegada de Cristóbal Colón al grito de «¡nos descubrieron, nos descubrieron!» Si bien Colón se propuso llevar algunos indígenas a España «para que aprendieran a hablar», luego reconocería que poseían un idioma propio y creería percibir palabras conocidas mal pronunciadas. La perspectiva del Almirante negaba que las gentes del Caribe tuvieran ley o religión: los indígenas, o eran asimilados al modo de vida europeo, o eran considerados seres humanos imperfectos¹. La perspectiva de los *descubridores* negaba a la población antillana una vida conforme a sus propios objetivos culturales y contribuiría a la instrumentalización de los indígenas para los propósitos de los recién llegados y los de sus sucesores.

Casi cinco siglos más tarde, simbolizando quizá la cólera secular de quienes seguían sin poder decidir el propio destino sobre suelo americano, en Haití una muchedumbre celebraba el fin de veintinueve años de régimen dictatorial derribando la estatua de Cristóbal Colón en Puerto Príncipe y arrojándola al mar². La dictadura de la familia Duvalier había dejado a la república antillana en un estado de ruina y desintegración sin precedentes. Cuando Jean-Claude Duvalier abandonó el poder, en febrero de 1986, Haití carecía de los alimentos necesarios para la satisfacción del consumo nacional mínimo de calorías; la esperanza de vida oscilaba en torno a los cincuenta y tres años y la mortalidad infantil era elevadísima; la producción agrícola de alimentos se estaba reduciendo gradualmente y el producto nacional bruto decrecía

¹ Tzvetan Todorov, *La conquista de América. El problema del otro*, Siglo XXI Editores, México, D. F., 1991, pp. 38-58.

² Jalil Sued-Badillo, «Christopher Columbus and the Enslavement of Amerindians in the Caribbean», *Monthly Review*, julio-agosto de 1992, p. 71.

un 2% anual. Durante 1985 el 90% de la población había ganado menos de 150 dólares³.

A partir del desmoronamiento de la dictadura duvalierista se sucedieron varios gobiernos militares que llegaban prometiendo democracia y se iban cuando el país se hacía ingobernable a causa de los abusos que cometían. Fue en marzo de 1990 cuando el ejército transfirió el poder a un gobierno provisional, encabezado por la presidenta del Tribunal Supremo, que pidió a la ONU y a la OEA el envío de observadores para garantizar la credibilidad de los comicios que se celebrarían en diciembre. Washington apoyó la primera convocatoria de elecciones libres en Haití cuando la Unión Soviética y sus satélites ya no podían ser usados como amenaza ni como coartada; cuando los sandinistas habían perdido las elecciones nicaragüenses en febrero de 1990 y la guerrilla salvadoreña buscaba un fin negociado al conflicto en El Salvador y cuando, por último, la Casa Blanca estrechaba el cerco en torno a Cuba. En junio el presidente George Bush había anunciado una era de democracia americana: «Con una excepción, la de Cuba, la transición hacia la democracia se aproxima a su consumación. A todos nos embarga la sensación de que no está lejano el día en que Cuba engrose las filas de las democracias mundiales, haciendo de América una región totalmente libre»⁴. Es más, la propia izquierda haitiana estaba demasiado dividida y mal organizada como para salir victoriosa de una contienda electoral.

Sin embargo, las élites haitianas perdieron las elecciones. La candidatura inesperada de Jean-Bertrand Aristide, un sacerdote muy comprometido con los sectores democráticos, obtuvo el 67% de los sufragios. Aristide tomó posesión en febrero de 1991 y fue depuesto por un golpe militar siete meses después. Concluida la Guerra Fría, la OEA se había comprometido a aislar a quienes alcanzaran el poder en América mediante un golpe de estado. La Casa Blanca, la OEA y la ONU condenaron el golpe y anunciaron su compromiso con la restauración de la democracia haitiana. Los hechos posteriores pusieron de manifiesto el abismo existente entre la retórica y la realidad.

³ James P. Grant, *Estado mundial de la infancia*, J & J Asociados, Barcelona, 1992, pp. 74 y 72; Michael S. Hooper, «Model Underdevelopment», *NACLA. Report on the Americas*, mayo-junio, 1987, p. 32; Instituto de Recursos Mundiales, *Recursos mundiales*, Ecoespaña Editorial, Madrid, 1997, p. 263; Inter-American Development Bank, *Emergency Recovery Program. Haiti*, 1995, p. 3.

⁴ Citado en José Ángel Sotillo Lorenzo, «Delenda est Cuba», *África-América Latina. Cuadernos*, n.º. 4, 1991, p. 24.

1. ¿RESTAURAR LA DEMOCRACIA?

Tras el golpe militar del 30 de septiembre de 1991 comenzó un proceso de negociaciones en el que se involucraron Washington, la OEA, la ONU, el presidente haitiano exiliado y los golpistas. A comienzos de octubre, la OEA instó a sus integrantes a imponer un embargo comercial contra Haití y, en noviembre, el presidente Bush autorizó el embargo estadounidense. Pero a lo largo de los tres meses que siguieron al golpe militar varios petroleros descargaron combustible en el país y se registró un flujo constante de mercancías a través de la frontera con la República Dominicana. Poco después, en febrero de 1992, la Casa Blanca levantó el embargo impuesto a las compañías estadounidenses con intereses en la república caribeña⁵. La puesta en práctica de las sanciones económicas reveló que se trataba de una medida destinada más a contentar a la opinión pública que a asfixiar al régimen golpista.

En cuanto comenzaron las negociaciones con los militares, Alvin Adams, el embajador estadounidense en Puerto Príncipe, pidió que el presidente legítimo regresara en un plazo de seis meses, la dimisión de su primer ministro y la elección de uno nuevo. Es decir, desde el primer momento se planteó que los militares debían recibir algo a cambio de abandonar el poder. Adams consideraba que el teniente general Raoul Cédras, el líder golpista, era «más parte de la solución que del problema»⁶.

La finalidad del proceso negociador fue tanto alargar la duración del régimen golpista como debilitar a los sectores democráticos. Estos objetivos pasaron desapercibidos para una gran parte de la opinión pública estadounidense debido al papel desempeñado por los grandes medios de comunicación. Inmediatamente después del golpe, los medios informativos desacreditaron el historial de derechos humanos del gobierno de Aristide a pesar de las notables mejorías que había logrado en ese terreno. Esto contribuyó a debilitar la capacidad negociadora del presidente exiliado. El mensaje implícito era obvio: la dictadura no es mucho peor. Y sí que lo fue. Los datos son contundentes: de febrero de 1991 a diciembre de 1992 Aris-

⁵ Ramón Paniagua, José B. Acosta Estévez, *La crisis haitiana y Naciones Unidas*, Asociación para las Naciones Unidas, Barcelona, 1994, pp. 18-9; Lawyers Committee for Human Rights, *Haiti. Learning the Hard Way. The UN/OAS Human Rights Monitoring Operation in Haiti 1993-1994*, LCHR, Nueva York, 1995, p. 5; United Nations Department of Public Information, *The United Nations and the Situation in Haiti*, UN Department of Public Information, 1995, pp. 1 y 2; National Labor Committee, *Haiti After the Coup: Sweatshop or Real Development?*, NLC, Nueva York, 1993, p. 10.

⁶ *Haiti Info*, 14, 11, 1993.

tide gobernó siete meses y Cédras quince. Se produjeron 43 muertes debidas a la violencia política bajo el período democrático y 1.867 ejecuciones extrajudiciales bajo el período dictatorial. Mientras que el régimen democrático **no** fue responsable de las muertes ocurridas durante su permanencia en el poder, el régimen militar **sí** fue responsable de las ejecuciones arbitrarias. En suma, durante el período señalado, el 2.3% de las muertes violentas políticamente motivadas se produjo bajo la administración democrática y el 97.7% correspondió a la etapa militar⁷.

El estudio de tres importantes periódicos estadounidenses realizado por el *Boston Media Action*, un grupo de seguimiento y crítica de los medios de comunicación de masas, estableció que del espacio dedicado a la violencia en Haití, a lo largo de los tres meses posteriores al golpe militar, un 43% se refirió al gobierno de Aristide y un 57% a la violencia que estaba perpetrando el régimen *de facto*. Los periódicos analizados fueron el *New York Times*, el *Washington Post* y el *Miami Herald*⁸. Durante las dos semanas posteriores al golpe el *New York Times* dedicó algo más del triple de espacio a los excesos ocurridos bajo el gobierno democrático que a la represión militar en curso. Esta cobertura fue tan sesgada que provocó una manifestación de protesta, el día 11 de octubre de 1991, de unos dos mil haitianos ante la sede del periódico en Nueva York⁹. Quedó establecido un marco informativo —más bien desinformativo— que ocultó el propósito de alargar la duración del régimen militar.

Tal propósito resulta evidente cuando se echa una ojeada a las negociaciones en que debían pactarse los términos de la retirada del poder por parte de los golpistas. Un grupo de parlamentarios haitianos, integrado casi exclusivamente por simpatizantes del golpe, se entrevistó en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias con el presidente Aristide en noviem-

⁷ *Haiti Info*, 28, 3, 1993; Catherine Orenstein, «Haiti in the Mainstream Press: Excesses and Omissions», *NACLA. Report on the Americas*, julio-agosto de 1993, p. 15; *Haiti Info*, 19, 12, 1992. El gobierno de Aristide también logró una mejoría en comparación con el de su predecesora. Si se incluyen los asesinatos comunes tenemos un total de 53 muertes violentas durante los siete meses de administración democrática y 208 durante los diez meses en que permaneció en el poder la presidenta provisional. En el primer caso se contabilizan casi 8 muertes violentas al mes y, en el segundo, alrededor de 20 mensuales (Americas Watch, National Coalition for Haitian Refugees, Caribbean Rights, *The Aristide Government's Human Rights Record*, AW, NCHR, CR, Nueva York, 1991, pp. 5, 6, 10 y 22-3).

⁸ EXTRA!, «Human Rights in Haiti», enero-febrero de 1993, p. 22; Orenstein, *op. cit.*, p. 15.

⁹ Anne-Christine D'Adesky, «Haitians Protest One-Sided Coup Coverage», EXTRA!, enero-febrero de 1992, p. 18.

bre de 1991. Los diputados presentaron una propuesta para el levantamiento del embargo, a cambio de más negociaciones, sin referirse a la fecha del retorno del presidente constitucional. Aristide rechazó la oferta y fue tildado por los parlamentarios y por el embajador estadounidense, que había viajado con ellos, de «intransigente»¹⁰.

Debido a las presiones de la OEA y de Estados Unidos, Aristide propuso un sustituto para su primer ministro. El 21 de diciembre, el Parlamento haitiano tuvo que suspender la discusión sobre la idoneidad del candidato propuesto: parlamentarios golpistas, uno de ellos sosteniendo una granada en la mano, amenazaron con matar a quienes votaran la ratificación del nuevo primer ministro. Un día después, Augusto Ramírez Ocampo, el enviado especial de la OEA, anunció la imposibilidad de la ratificación prevista y sugirió la candidatura de René Théodore, que fue apoyada por la administración estadounidense. Théodore, que había obtenido sólo el 1.8% de los votos en los comicios de 1990, poseía una filiación comunista que podría servir de pretexto a los militares para rechazarlo. Aristide se encontró sin alternativas: el 28 de diciembre, el *New York Times*, citando diplomáticos anónimos, explicó que si el presidente exiliado no aceptaba la propuesta abriría la posibilidad de nuevas elecciones y «el consenso en torno al embargo hemisférico impuesto sobre Haití durante los últimos tres meses se disipará»¹¹. Aristide aceptó que Théodore, un firme adversario suyo, pudiera ser nombrado primer ministro.

Las conversaciones prosiguieron en Washington y, en febrero de 1992, se firmó un Protocolo de Acuerdo entre el presidente en el exilio y los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados. Pero las divergencias posteriores entre las autoridades *de facto* y las legítimas, hicieron inviable la puesta en práctica del Protocolo de Washington. Aristide explicaría posteriormente el motivo por el que firmó el acuerdo: «Supongamos por un momento que hubiera yo rechazado un acuerdo considerado injusto; los militares habrían aplaudido, junto con todos aquellos que piensan que la libertad no se comparte; mis interlocutores, sus camarillas y sus portavoces habrían gritado la misma cantinela: Aristide es inflexible, sectario, intransigente, incapaz de un compromiso o de una voluntad positiva, insensible a los sufrimientos de su pueblo, responsable de próximas víctimas»¹².

¹⁰ Kim Ives, «The Unmaking of a President», *NACLA. Report on the Americas*, enero-febrero de 1994, p. 20.

¹¹ Citado en Ives, *op. cit.*, p. 21.

¹² Jean-Bertrand Aristide, *Dignidad*, Iepala Editorial, Madrid, 1995, p. 132.

El pacto que sí tuvo éxito fue el Acuerdo de Villa d'Accueil, firmado por el ejército, el ejecutivo ilegal y los legisladores partidarios del golpe, con el objetivo de nombrar un primer ministro *de facto* más aceptable para la Casa Blanca. El escogido fue un antiguo funcionario del Banco Mundial, Marc Bazin, que había sido el candidato favorito de la Administración Bush en las elecciones que ganó Aristide. En cuanto Bazin tomó posesión como primer ministro *de facto*, en junio de 1992, empezó a aumentar gradualmente la involucración de la ONU y la OEA en la crisis haitiana. Dante Caputo fue designado enviado especial para Haití por los secretarios generales de ambas organizaciones que, asimismo, establecieron la Misión Civil Internacional en Haití con el objeto de supervisar la situación de los derechos humanos. El despliegue de observadores comenzó en febrero de 1993.

Durante los veintidós meses transcurridos entre el golpe de estado y la firma del Acuerdo de la Isla de los Gobernadores el país vivió sometido a una dura represión. Quienes vivían en áreas consideradas favorables al regreso de Aristide quedaron expuestos a todo tipo de agresiones por parte del ejército y de los grupos paramilitares: desde destrucción de viviendas, extorsiones o robos, hasta palizas, torturas o asesinatos. El régimen se implicó en lo que fue descrito por Naciones Unidas como una política de «represión preventiva» que obligó a 300.000 personas a huir de sus hogares. Se emitieron por radio listas de individuos y organizaciones que debían ser suprimidos. También se generalizaron las prácticas extorsivas que obligaban a pagar dinero para no sufrir detenciones, malos tratos o torturas, para mejorar las condiciones de encarcelamiento o para conseguir la libertad. La represión se convirtió en un elemento esencial del proceso político que se estaba desarrollando¹³.

Las negociaciones posteriores al golpe de estado culminaron, primero, en el Acuerdo de la Isla de los Gobernadores de julio de 1993 y, segundo,

¹³ Haitian Information Bureau, «Chronology. Events in Haiti, October 15, 1990-May 11, 1994», en J. Ridgeway, ed., *The Haiti Files. Decoding the Crisis*, Essential Books, Washington, D. C., 1994, pp. 213-21; Lawyers Committee for Human Rights, *op. cit.*, p. 6; Human Rights Watch/Americas, National Coalition for Haitian Refugees, *Terror Prevails in Haiti. Human Rights Violations and Failed Diplomacy*, HRW/A, NCHR, Washington, D. C., 1994, p. 9; Amnistía Internacional, *Haití. Entre la espada y la pared: ¿represión militar o invasión extranjera?*, AI, Madrid, 1994, p. 3; United Nations. Commission on Human Rights, *Report on the Situation of Human Rights in Haiti Submitted by Mr. Marco Tulio Bruni Celli, Special Rapporteur, in Accordance with Commission Resolution 1992/77*, Commission on Human Rights, Nueva York, 1993, parágrafo, 14; Amnistía Internacional, *Haití. La tragedia*, Editorial Amnistía Internacional, Madrid, 1992, pp. 20 y 10-1; Amnistía Internacional, *Haití. Los derechos humanos secuestrados*, AI, Madrid, 1992, pp. 10-1 y 18-9.

en la invasión estadounidense de septiembre de 1994. Se trataba de un mismo proceso político que se proponía debilitar por completo a los sectores democráticos mediante un apoyo no reconocido a los golpistas. La Casa Blanca insistiría en que su meta era la restauración de la democracia haitiana. Sin embargo, su objetivo real era la reestructuración de los gobiernos dictatoriales que precedieron al de Aristide. Había que readaptar un régimen autoritario a un nuevo medio internacional. Tal readaptación suele describirse erróneamente como un proceso de transición a la democracia.

2. EL ACUERDO DE LA ISLA DE LOS GOBERNADORES

El proceso de negociaciones desarrollado durante 1993 debilitó adicionalmente la posición en que se encontraban los demócratas haitianos y propició algunos meses de represión mucho más dura de lo habitual. Las dos opciones contempladas por los sectores dirigentes de Estados Unidos resultaron problemáticas. La primera, tratar el problema como un asunto interno haitiano, chocó tanto con el enfoque de la política estadounidense hacia Latinoamérica, contrario a reconocer gobiernos golpistas, como con las presiones de los grupos negros en los Estados Unidos. La segunda opción, el regreso del gobierno constitucional, provocó divisiones en Washington debido a los riesgos que suponía. Aristide podría volver a hacerse demasiado independiente y encontrarse más afianzado en el poder que en el período previo al golpe militar. Si la Casa Blanca provocaba la caída del gobierno ilegítimo los sectores golpistas haitianos quedarían seriamente debilitados y, además, un nuevo golpe militar, después de una invasión estadounidense, sería presentado como un fracaso de la Administración Clinton. Por tales motivos se explica que el manejo de la crisis estuviera tan plagado de vacilaciones y de aparentes contradicciones. Sin embargo, desde el punto de vista propagandístico la mejor opción era el regreso de Aristide. Esto fue lo que posteriormente los medios de comunicación presentaron como un éxito en la política exterior del presidente Clinton. Ese éxito político buscado por la administración demócrata exigió que, detrás del montaje escénico y propagandístico, se desarrollara una impresionante labor de socavamiento de los sectores democráticos. Y, en suma, ahí estaba lo relevante. Ahí estaba lo que tenían en común las dos opciones contempladas desde Washington: la destrucción de la democracia en Haití. Entre los planificadores políticos había diferencias con respecto a qué medios emplear, pero no con respecto a los fines.

Las gestiones de Dante Caputo, el enviado especial de los secretarios de la ONU y de la OEA, se encaminaron hacia el logro de un acuerdo sobre tres cuestiones principales: retorno del presidente Aristide a Haití, nombramiento de un gobierno de «concordia nacional» y amnistía para el ejército. Por supuesto, negociar tales objetivos llevaba implícita una legitimación parcial del legado golpista: los crímenes cometidos por los militares permitirían la participación en el gobierno a sectores muy minoritarios. El motivo de que esto supusiera una legitimación parcial del régimen *de facto* se halla en la ausencia de voluntad previa para debilitar a ese régimen. Dicho de otro modo: resultó necesario efectuar concesiones al poder de los golpistas porque no hubo voluntad internacional para debilitar tal poder. En realidad, los militares estaban disfrutando de un margen de maniobra amplio mientras se reducía el de los demócratas, algo que Cédras entendía muy bien. Es más, algunos aspectos de esa situación debieron resultarle divertidos. Así, en mayo de 1993, explicó que el regreso del presidente Aristide sería inconstitucional «porque violó la Constitución más de cien veces mientras estaba en el poder»¹⁴. Luego, en noviembre, afirmar que la comunidad internacional estaba «denegando a Haití el derecho a reforzar sus instituciones republicanas, organizar verdaderos partidos políticos, esparcir el pluralismo...»¹⁵. Al mismo tiempo, el ejército enviaba una carta al ministro de Defensa haitiano, Jean Beliotte, notificándole una condena de diez días de prisión por haber afirmado, en octubre, que Cédras estaba «en rebeldía». La sensación de poseer una licencia de la comunidad internacional para delinquir quedó reflejada en una respuesta que, en 1994, daría Charles David, ministro de Exteriores *de facto*, en relación a los asesinatos políticos: afirmó que aviones procedentes de Miami estaban trasladando cadáveres llenos de balas para desacreditar al gobierno. La respuesta provocó una carcajada entre sus colaboradores¹⁶.

El proceso negociador debilitaba a los demócratas haitianos por varios motivos. Para empezar, cuanto más tiempo aguantara el régimen *de facto* en el poder mayor impacto tendría la represión sobre los sectores democráticos y más arruinada quedaría la economía nacional. Esto reduciría significativamente el margen de maniobra futuro de que dispondrían los gobernantes legítimos. Y si el alargamiento de las negociaciones resultó perjudicial, lo acordado en ellas lo fue aún más.

¹⁴ Haitian Information Bureau, *op. cit.*, p. 222.

¹⁵ *Haiti Info*, 28, 11, 1993.

¹⁶ *Haiti Info*, 14, 11, 1993; *The Economist*, 16, 7, 1994.

La concesión de una amnistía a los militares y sus colaboradores fue el elemento clave de la negociación. En marzo de 1993, Aristide había accedido a otorgar una amnistía amplia durante un encuentro con el presidente Clinton en la Casa Blanca: «la salida de los autores del golpe de estado no significa necesariamente que tengan que estar en la cárcel o tengan que abandonar el país». Clinton apoyó la declaración afirmando que «ese tipo de actitud por parte del presidente Aristide es exactamente lo que puede permitirnos resolver esto de un modo pacífico»¹⁷. Otro elemento esencial de cualquier acuerdo sería el establecimiento de algún mecanismo para asegurar la continuidad de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, Clinton propuso una solución que no gustó a la cúpula militar. En abril anunció un plan para el envío de una fuerza multinacional de policía con el propósito de «profesionalizar» al ejército haitiano. Esta fue la primera propuesta concreta y oficial estadounidense para enviar fuerzas de seguridad extranjeras a Haití. Reflejaba la percepción de que era preciso algún tipo de intervencionismo armado si debían emprenderse cambios en el ejército haitiano destinados a asegurar posteriormente el control de la transición hacia lo que se describiría como democracia. Clinton afirmaría más tarde que la solución del problema haitiano exigía la presencia de una fuerza multinacional y que el embargo no sería suficiente. En mayo, Caputo y Lawrence Pezzullo, enviado especial de la Casa Blanca para Haití, presentaron conjuntamente sus propuestas. El alto mando rechazó los componentes militares y policiales de la oferta. Así que, un mes después, el embargo impuesto por el Consejo de Seguridad de la ONU obligó rápidamente a los golpistas a integrarse en las negociaciones que se iniciaron en la Isla de los Gobernadores, en Nueva York¹⁸.

Durante las negociaciones Aristide descubrió que se habían suavizado las exigencias relativas a la destitución del alto mando militar. Si bien a lo largo de las conversaciones previas se entendió que debían dimitir todos los miembros del alto mando y Michel François, el jefe de la policía, el texto definitivo del acuerdo sólo incluyó la retirada de Cédras. Asimismo, se decidió que en cuanto el presidente designara a un nuevo primer ministro se procedería al levantamiento del embargo. Aristide quedaba comprome-

¹⁷ Citados en Ives, *op. cit.*, p. 24.

¹⁸ Ramón Paniagua, José B. Acosta Estévez, *op. cit.*, pp. 65-6; Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, *Resolución 841*, 16 de junio de 1993; Ian Martin, «Haiti: Mangled Multilateralism», *Foreign Policy*, verano de 1994, pp. 76-9; Ives, *op. cit.*, pp. 24-5; Lawyers Committee for Human Rights, *op. cit.*, pp. 105-10; Mark Danner, «Haiti on the Verge», *The New York Review of Books*, 4, 11, 1993, p. 26; *Haiti Info*, 6, 7, 1993; el texto del Acuerdo de la Isla de los Gobernadores puede encontrarse en Aristide, *op. cit.*, pp. 200-2.

tido a la promulgación de una amnistía. También fue acordado su regreso para el día 30 de octubre de 1993. Sin embargo, Aristide comprendió que el acuerdo era una derrota para el sector democrático, pues él y sus consejeros habían propuesto que el nombramiento del nuevo primer ministro y la dimisión de Cédras fueran simultáneos. El rechazo de la propuesta significó que el ejército podría obstruir el cumplimiento de estos compromisos puesto que, una vez nombrado el nuevo primer ministro, Cédras seguiría al frente de las Fuerzas Armadas. El recurso a maniobras obstruccionistas se veía facilitado gracias al plazo de cuatro meses, innecesariamente amplio. Pero, el día 3 de julio, el presidente firmó debido a las fuertes presiones recibidas. Algunos colaboradores de Aristide confirmaron que hubo numerosas llamadas de congresistas, diplomáticos y funcionarios de la ONU y la OEA instándole a firmar. Las vacilaciones de Aristide habían puesto nerviosos a los negociadores. Le indicaron que si no firmaba podrían levantar el embargo y, quizá, tuviera que volver a Washington a pedir asilo político. El secretario general de la ONU, Boutros Boutros-Ghali, le dijo: «No lo piense más señor presidente. Fírmelo»¹⁹. En cuanto el acuerdo fue firmado Clinton lo calificó de «histórico paso adelante para la democracia». Caputo afirmó que era «un modelo para el futuro»²⁰. Es posible que Caputo tuviera razón. Clinton no: fue un paso atrás para la democracia.

Como explicaría, el día 21 de julio, Claudette Werleigh, directora de la *Washington Office on Haiti* y luego ministra de Exteriores de Aristide, ante un subcomité de la Cámara de Representantes, «es una ficción hablar de la restauración de la democracia en cualquier sociedad en la que los derechos humanos no son respetados». El Acuerdo de la Isla de los Gobernadores, proseguía Werleigh, en ningún lugar afirma «que los militares deben dejar de disolver manifestaciones pacíficas, deben dejar de golpear y torturar a la gente, deben dejar de violar a las mujeres y de asesinar a la gente como condición para que las sanciones internacionales sean levantadas»²¹. La incompatibilidad entre la instauración progresiva de un clima político democrático y la ausencia de medidas para refrenar la represión fue planteada por los tres expertos que la ONU había enviado a Haití con el fin de hacer recomendaciones a la Misión Civil Interna-

¹⁹ Citado en Alex Dupuy, *Haiti in the New World Order. The Limits of the Democratic Revolution*, Westview Press, Boulder (Colorado), 1997, p. 145.

²⁰ Citados en Ives, *op. cit.*, p. 26.

²¹ Claudette Werleigh, «We Must Stand Up to the Military», *Challenge: Faith and Action in the Americas*, otoño de 1993, p. 6.

cional: «Predecimos un rápido surgimiento de serios problemas para la Misión si transcurren muchos meses antes de que un gobierno legítimo, que disfrute de la confianza pública, vuelva al poder. Si la Misión es verdaderamente exitosa al principio en suscitar la confianza de la población, ello llevará rápidamente, de modo creciente, a intentos perentorios de ejercer la libertad de expresión. Del abrumador predominio de actividad política, popular y periodística libremente expresada puede esperarse el cuestionamiento de las autoridades *de facto* y del historial de derechos humanos de los militares y la exigencia de un pronto retorno del presidente Aristide. Por la otra parte, encontramos pocos indicios de que los militares y las autoridades *de facto* estén preparados para tolerar tal actividad en la práctica»²².

El asunto de la amnistía fue lo peor del Acuerdo de la Isla de los Gobernadores. John Shattuck, subsecretario de Estado para los Derechos Humanos y Asuntos Humanitarios, escribió, en 1993, que «cuando los responsables de violaciones de derechos humanos pueden cometerlas con impunidad, los abusos se multiplican»²³. El asunto es así de simple. Por ello no es de extrañar que el acuerdo de julio de 1993, en la práctica, implicara la concesión de una amnistía para los delitos que se perpetraran durante los cuatro meses venideros. Por supuesto, también se incluyeron los delitos cometidos después del golpe. Es más, si lo acordado en las negociaciones no llegara a funcionar, las autoridades militares sabían que podrían seguir asesinando y torturando, pues ya habría tiempo de discutir nuevas amnistías. Por lo pronto, la amnistía no era una concesión efectuada a un adversario poderoso con la finalidad verosímil de evitar un mal mayor; no era una concesión hecha después de un embargo riguroso destinado a debilitar completamente a los golpistas; tampoco era una concesión que impediría el surgimiento de futuros Cédras en Haití y en la región. La amnistía fue un acto de complicidad con el régimen por parte de funcionarios estadounidenses y de la ONU y la OEA.

Los militares haitianos consideraron que la amnistía estipulada en el Acuerdo de la Isla de los Gobernadores era una licencia para asesinar y torturar durante los siguientes cuatro meses. De modo que, si en mayo se habían registrado nueve asesinatos políticos y en junio cinco, en julio se cometieron treinta y cuatro asesinatos, en agosto treinta y tres, en septiembre unos sesenta, en octubre unos ochenta y en noviembre alrededor de

²² Citados en Martin, *op. cit.*, p. 76.

²³ Citado en Amnistía Internacional, *Los derechos humanos y la asistencia de los Estados Unidos en materia de seguridad*, Editorial Amnistía Internacional, Madrid, 1995, p. 10.

setenta²⁴. La represión experimentó un fuerte aumento y se hizo evidente que el acuerdo no sería puesto en práctica. El 24 de agosto de 1993, cuando el ponente especial de la ONU se entrevistó con Cédras y con los ocho coroneles que integraban el Alto Mando de las Fuerzas Armadas llegó a la conclusión de que estaba claro que los militares no se proponían el cumplimiento del acuerdo²⁵. En cualquier caso, la violencia estaría ocupando buena parte del espacio político.

Sin embargo, la parodia de la transición a la democracia prosiguió. Los parlamentarios elegidos en las elecciones ilegales que habían convocado los golpistas abandonaron sus escaños y se procedió a la ratificación del nuevo gobierno. Robert Malval, quien tomó posesión como primer ministro en la embajada haitiana de Washington el día 30 de agosto, era un rico impresor bien relacionado con la élite y el ejército. Tres días antes de la ceremonia en la embajada, una vez que Malval había sido ratificado por el Parlamento de Haití, el Consejo de Seguridad de la ONU levantó el embargo.

A Malval no le quedó otra opción que la de trabajar en su casa porque las dependencias oficiales permanecieron ocupadas por *attachés*, los civiles armados que actuaban bajo la cobertura del ejército. El 8 de septiembre, se efectuó la ceremonia en que Evans Paul, el alcalde de Puerto Príncipe, reasumiría su cargo. Unos días antes, un grupo de *attachés* había ocupado el Ayuntamiento y uno de ellos había afirmado a través de la radio que si Malval o Evans acudían a la sede municipal «serán cadáveres». Hasta media hora antes del inicio de la ceremonia prevista más de doscientos *attachés* permanecían en el interior del edificio. Por último, unos treinta policías uniformados permitieron el acceso de las autoridades legales al Ayuntamiento. Mientras se desarrollaba el acto, los *attachés* apaleaban a la multitud congregada en el exterior del edificio, ante la indiferencia de los policías uniformados presentes. Al menos tres personas perdieron la vida y otras dieciocho resultaron heridas. Los ataques sobre los partidarios del presidente constitucional se incrementaron notablemente. También hubo una atmósfera constante de intimidación y de amenazas contra las autoridades legítimas²⁶.

²⁴ Human Rights Watch/Americas, National Coalition for Haitian Refugees, *op. cit.*, p. 6.

²⁵ United Nations. Commission on Human Rights, *Report Submitted by Mr. Marco Tulio Bruni Celli, Special Rapporteur, in Accordance with Commission Resolution 1993/68*, Commission on Human Rights, Nueva York, 1994, párrafos 20 y 221.

²⁶ Haitian Information Bureau, *op. cit.*, p. 224; Ives, *op. cit.*, p. 28; Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, *Resolución 861*, 27 de agosto de 1993; Human Rights Watch/Americas, National Coalition for Haitian Refugees, *op. cit.*, pp. 8 y 24.

A este clima generalizado de violencia contribuyeron los envíos de armas a Haití iniciados en torno a la fecha en que se firmó el Acuerdo de la Isla de los Gobernadores. A partir de entonces, y durante algo más de un año, se recibieron entre cinco y diez mil unidades procedentes de Florida. Los envíos incluyeron revólveres Colt 38, pistolas semiautomáticas de nueve milímetros, subametralladoras Thompson, granadas de fragmentación y otras armas. Un oficial del ejército haitiano que participó en los suministros de armas señaló a la organización paramilitar que acababa recibiendo: el Frente para el Avance y el Progreso de Haití (FRAPH). El mismo oficial explicó la razón de ser del FRAPH: era necesario para mantener el control porque se trataba de «7.000 de nosotros contra 7 millones de civiles»²⁷. La distribución de las armas era controlada por el jefe de la policía, Michel François, y sus colaboradores próximos, coordinados por Emmanuel Constant, el líder del FRAPH, y otros dirigentes de la organización. Los envíos de armas también se hicieron a través de Jamaica, las Islas Caicos y la República Dominicana. El hermano de Michel François, Evans, que según Pezzullo trabajó para la CIA, gestionaba los envíos de armas y las finanzas del jefe de policía desde la República Dominicana. Otro flujo de armas para el FRAPH, de similar magnitud al procedente de Florida, tuvo su origen en Brasil e incluyó rifles M-16, pistolas Colt 45 y 38 y subametralladoras Uzi.

Entre 1991 y 1994, Emmanuel Constant fue un agente pagado por la CIA. En un programa emitido por la CBS, en 1995, afirmó que se había estado reuniendo con personal de la Agencia frecuentemente. Contó que le habían proporcionado un sofisticado transmisor, que le eran entregados setecientos dólares mensuales en efectivo por el jefe de estación de la CIA en Puerto Príncipe y, asimismo, afirmó que sus encuentros con el funcionario estadounidense tuvieron lugar mientras daban largos paseos en coche. Suministraba información contra Aristide, discutía sus ambiciones para llegar a ser presidente del país —estimulado por el jefe de estación— e informaba de sus actividades políticas y paramilitares. «Ellos sabían exactamente lo que yo estaba haciendo»²⁸, señaló Constant. El portavoz de la CIA, Mark Mansfield, no comentó la relación de la Agencia con Constant y negó cualquier relación de la CIA con el FRAPH o con actividades antidemocráticas en Haití.

Emmanuel Constant recuerda que quien primero se le acercó, después del golpe de estado de 1991, fue el coronel Patrick Collins, el agregado de

²⁷ Citado en Allan Nairn, «Haiti Under the Gun», *The Nation*, 8, 1, 1996, p. 14.

²⁸ Citado en *International Herald Tribune*, 4, 12, 1995.

la Agencia de Inteligencia de Defensa estadounidense en Haití. Collins pretendía el establecimiento de una organización que sirviera para neutralizar al movimiento de Aristide y hacer trabajo de inteligencia contra él. Entonces Constant formó la Liga de Resistencia Haitiana que posteriormente se transformó en el FRAPH. Un funcionario estadounidense de inteligencia explicó a Allan Nairn, el autor de los hallazgos más importantes sobre el FRAPH, que el número dos de la organización, Louis Jodel Chamblain, era un «asesino psicópata, despiadado, sanguinario». Sin embargo, a su jefe, Emmanuel Constant, lo describió como a un «joven intelectual pro-occidental... no más a la derecha que un joven republicano; él sería considerado de centroderecha en los Estados Unidos»²⁹. Como dice Nairn, los supervivientes de las torturas del FRAPH no aprecian la diferencia entre ambos.

El FRAPH se convirtió en un instrumento de oposición violenta a la puesta en práctica del Acuerdo de la Isla de los Gobernadores. Sus integrantes, que poseían tarjetas de identificación facilitadas por el ejército, emprendieron una violenta campaña de apoyo a Cédras. Mientras que la organización paramilitar pretendía ser un partido político, aunque nunca se registró como tal en Haití ni participó en un proceso político constitucional, la embajada de Estados Unidos y el Departamento de Estado se refirieron al FRAPH como a una «organización paramilitar ilegítima»³⁰.

3. ¿ÉXITO O FRACASO?

Naciones Unidas había decidido el envío de una fuerza internacional para ayudar en la «modernización» del ejército haitiano y para establecer una nueva fuerza de policía. Así, entre septiembre y octubre de 1993, algo más de cien personas asignadas a tareas militares y policiales llegaron a Puerto Príncipe. Para el día 11 de octubre estaba previsto el atraque del buque de la Armada estadounidense *USS Harlan County* y el desembarque de otros doscientos veinte integrantes del personal militar y policial de la

²⁹ Citado en Allan Nairn, «Occupation Haiti: The Eagle Is Landing», *The Nation*, 3, 10, 1994, p. 346.

³⁰ Allan Nairn, «Haiti Under...», p. 14; A. Nairn, «Behind Haiti's Paramilitaries», *The Nation*, 24, 10, 1994, pp. 458-60; United States District Court Eastern District of New York, *Balance v. FRAPH: Plaintiff's Memo in Support of Motion for Default Judgement*, <http://diana.law.yale.edu/diana/db/2619defj.html>, pp. 9 y 10.

ONU. Esas fuerzas debían contribuir al clima de seguridad mínimo indispensable que permitiera el regreso de Aristide.

En el transcurso de una reunión duvalierista a la que asistió personal de la embajada de los Estados Unidos, el día previo a la llegada del *USS Harlan County*, el corresponsal estadounidense del *New York Daily News* fue informado del plan para sabotear el desembarco del contingente de Naciones Unidas que llegaría un día después. El propio Emmanuel Constant anunció públicamente la protesta que tenían prevista pero no recibió indicación alguna estadounidense para que desistiera. Supuestamente, como el plan era desconocido no hubo preparativos destinados a garantizar la seguridad durante el atraque del buque. Así que, en cuanto llegaron al muelle de Puerto Príncipe los diplomáticos y los periodistas que iban a recibir al *USS Harlan County*, más de cien partidarios armados del FRAPH se manifestaron ruidosamente profiriendo amenazas contra la presencia extranjera. Una vez que el *USS Harlan County* llegó a Puerto Príncipe, en lugar de prolongar la espera en el muelle mientras los militares haitianos eran presionados para asegurar el desembarco, se retiró a Guantánamo. La decisión de retirar el buque, que fue tomada por el Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos sin consultar ni informar a la ONU o a la OEA, era un descarado sabotaje del Acuerdo de la Isla de los Gobernadores por parte de la Administración Clinton. Incluso Dante Caputo manifestó su indignación: «La excusa para la retirada fue esa manifestación, y esa es la palabra correcta, excusa... Había 200 personas gritando en el puerto. A comienzos de este año, nos enfrentamos con 3.000 personas cuando vinimos aquí por primera vez, muchas de ellas armadas, pero seguimos adelante»³¹. A los organizadores de la protesta les resultaba difícil creerse el éxito. Emmanuel Constant contó posteriormente que «mi gente estaba deseando huir, pero acepté la jugada y les insté a permanecer. Entonces, los americanos se fueron. Estábamos asombrados. Ese fue el día en que el FRAPH realmente nació»³². Lo sucedido con el *USS Harlan County* precipitó la retirada de la presencia internacional existente en Haití.

El 13 de octubre el Consejo de Seguridad de la ONU decidió la entrada en vigor de la reimposición del embargo en un plazo de cinco días. Guy Malary, el ministro de Justicia de Malval, fue asesinado al día siguiente. Por su parte, el presidente Clinton aún se mostraba optimista sobre las posibilidades de que Aristide regresara en la fecha prevista y, en el curso de una

³¹ Citado en Human Rights Watch/Americas, National Coalition for Haitian Refugees, *op. cit.*, p. 37.

³² Citado en Martin, *op. cit.*, pp. 72-3.

conferencia de prensa, anunciaba que su determinación a favor de un sistema democrático para Haití «es tan fuerte como siempre». Eso es indudable. El mensaje de la embajadora estadounidense en las Naciones Unidas, Madeleine Albright, fue más explícito: señaló que su país estaba dispuesto a llevar a cabo «todo lo que sea necesario para reinstaurar la democracia, excepto medidas militares que nadie desea»³³. Los jefes del ejército haitiano podían estar tranquilos: proseguirían las negociaciones dilatorias.

Las atrocidades habituales continuaron: debía sostenerse el clima represivo a lo largo de las negociaciones venideras para hacer más razonable al presidente exiliado. En la noche del 16 de octubre de 1993, en Puerto Príncipe, miembros del FRAPH irrumpieron en la vivienda de un activista de la coalición que apoyó a Aristide. Como no lo encontraron se llevaron a su esposa, Alerthe Belance, una vendedora ambulante de 32 años, y la condujeron a Titayen, un lugar utilizado por el aparato represivo del régimen para deshacerse de los cadáveres de opositores. En cuanto llegaron a Titayen, Alerthe Belance fue salvajemente golpeada: recibió machetazos en la nariz, en la boca, en las orejas y en los brazos. Aunque sus captores la dejaron por muerta, Belance sobrevivió milagrosamente. Debido a que el incidente se hizo público, los médicos se vieron obligados a esconderla en las tres ocasiones en que los asesinos aparecieron por el hospital para rematarla. Esos mismos médicos tendrían que ocultarse luego para evitar represalias del FRAPH.

Cuando se repuso de las heridas solicitó asilo político a la embajada de Estados Unidos. Le dijeron que no debía haberse metido en política y que, por haberlo hecho, era responsable de su situación. También le advirtieron que se abstuviera de hacer política cuando llegara a Estados Unidos. Abandonó Haití, junto con su marido y sus tres hijos, en enero de 1994. Una vez en Estados Unidos, el Centro de Derechos Constitucionales presentó una querrela contra el FRAPH en nombre de Belance. Con posterioridad, se supo que, según un documento de la CIA desclasificado en relación al pleito, el FRAPH y el jefe del Estado Mayor del ejército, general Phillippe Biamby, habían planeado el asesinato de Malary y sus dos acompañantes. El documento está fechado el 28 de octubre de 1993. Esto quiere decir que, a las dos semanas del crimen, el gobierno estadounidense supo, o sospechó, quiénes eran los responsables. Pese a ello, o por ello, la embajada continuó efectuando pagos a Constant.

La orgía de crímenes desatada por el Acuerdo de la Isla de los Gobernadores en 1993 culminó el 27 de diciembre. Ese día el FRAPH atacó Cité

³³ *El País*, 15, 10, 1993.

Soleil, un barrio pobre de la capital muy identificado con Aristide y provocaron un incendio que destruyó no menos de mil viviendas. Mientras el fuego se iba expandiendo los atacantes disparaban contra quienes huían. Los policías y los militares que se hallaban en las inmediaciones no intervinieron. Entre cincuenta y setenta personas perdieron la vida³⁴.

En cuanto fue imposible continuar fingiendo que el Acuerdo de la Isla de los Gobernadores iba a ser puesto en práctica se inició una campaña de difamaciones contra el presidente constitucional. El 20 de octubre, el senador Jesse Helms organizó una reunión para algunos de sus colegas con Brian Latell, el principal analista de la CIA para América Latina. La reunión sirvió para airear viejas y nuevas calumnias. Latell había visitado Haití durante el verano de 1992 y en un informe, fechado el 21 de julio de aquel año, había escrito: «no quiero minimizar el papel que juegan los militares en la intimidación, y ocasionalmente en aterrorizar a oponentes reales e imaginados, pero mi experiencia confirma el parecer de la comunidad [de inteligencia] de que no hay violencia frecuente letal o sistemática dirigida a los civiles». Latell se había reunido con Bazin y Cédras: «Esos encuentros reforzaron mi opinión de que Bazin y sus partidarios [civiles] son quizá el más prometedor grupo de líderes haitianos desde que la dictadura de la familia Duvalier fue depuesta en 1986... El general Cédras me impresionó como un líder militar consciente que genuinamente desea minimizar su papel en política, profesionalizar los servicios armados y desarrollar una fuerza de policía civil separada y competente. Creo que es relativamente moderado e incorrupto»³⁵. Lo que Helms escuchó en la reunión con Latell justificó su parecer con respecto al presidente exiliado: «Aristide es un asesino». El contenido de la reunión fue filtrado al *Washington Post* que, en su edición del 22 de octubre, informó sobre una visita de Aristide a un hospital psiquiátrico en Canadá en 1980. Latell señaló que el dirigente haitiano padecía desórdenes psicológicos, que había hecho uso de trece tipos de medicación y, por último, también mostró la carta de un médico canadiense que avalaba sus afirmaciones. Más tarde se supo que esa carta era una falsificación y que el médico que la firmó no existía. Pero lo importante fue que se logró el objetivo de desacreditar al presidente hai-

³⁴ Amnistía Internacional, *Haití. Entre la espada y la pared...*, pp. 14-5 y 9; *Alerte Belance v. FRAPH*, <http://diana.law.yale.edu/diana/db/2619.html>, pp. 3 y 4; United States District Court Eastern District of New York, *Belance v. FRAPH: Plaintiff's Memo...*, p. 13; *Challenge: Faith and Action in the Americas*, otoño de 1994; *Haiti Info*, 19, 10, 1996; 23, 1, 1994 y 8, 1, 1994.

³⁵ Reproducido en John Canham-Clyne, «U. S. Policy on Haiti: Selling Out Democracy», *Covert Action Quarterly*, primavera de 1994, p. 54.

tiano. El mismo día 22, la CNN informó que «el perfil psicológico [de la CIA] sugiere firmemente que Jean-Bertrand Aristide puede estar mentalmente trastornado»³⁶. El *Washington Post* refirió, unos días después, que el director de la CIA había manifestado, a miembros de los comités de inteligencia del Congreso y el Senado, su apoyo a las afirmaciones de Latell. Richard Cheney, ex secretario de Defensa, expresó en una entrevista televisada sus dudas sobre la estabilidad mental de Aristide. Sin embargo, Clinton y algunos otros funcionarios de su gobierno afirmaron que encontraban al líder haitiano apto para ser presidente de Haití³⁷.

Lawrence Pezzullo consideró que el acuerdo había fracasado debido a «una falta de consenso dentro de Haití –la ausencia de confianza en que ambas partes estaban ciertamente reconciliándose–». «Después de Isla de los Gobernadores, los acontecimientos empezaron a moverse en direcciones que no eran positivas. En lugar de reconciliación política, ambos protagonistas –Aristide y Cédras– socavaron el Acuerdo que firmaron en la Isla de los Gobernadores»³⁸, concluyó Pezzullo. La explicación ofrecida por un asesor de Cédras a la revista *Time* ilustra mejor el significado de lo sucedido: «todo el asunto fue una cortina de humo... Quisimos obtener el levantamiento de las sanciones. Por eso es por lo que seguimos adelante. Pero nunca tuvimos intención alguna de aceptar realmente Isla de los Gobernadores, como estoy seguro de que todo el mundo puede ahora explicarse por sí mismo. Estábamos ganando tiempo»³⁹. A la luz de los hechos debe concluirse que la aplicación del acuerdo fue un éxito puesto que cumplió su verdadero objetivo: debilitar a los sectores democráticos haitianos y alargar la duración del régimen ilegítimo.

4. UNA INVASIÓN NECESARIA

Las negociaciones que debían permitir el regreso del gobierno constitucional haitiano prosiguieron mientras se intensificaba la represión. En 1994, de enero a julio, la Misión Civil Internacional en Haití (MICIVIH)

³⁶ Citados en Mark Danner, «The Fall of the Prophet», *The New York Review of Books*, 2, 12, 1993, p. 44.

³⁷ Sheldon Rampton, «Hustling for the Junta: PR Fights Democracy in Haiti», *PR Watch*, tercer trimestre de 1994; Mark Danner, «The Fall...», pp. 44-5.

³⁸ Lawrence Pezzullo, «The Challenge of the Negotiation Process», en G. A. Fauriol, ed., *Haitian Frustrations. Dilemmas for U. S. Policy*, The Center for Strategic and International Studies, Washington, D. C., 1995, p. 102.

³⁹ Citado en Rampton, *op. cit.*, p. 10.

tuvo noticia de trescientas cincuenta ejecuciones extrajudiciales o muertes sospechosas. Pero esa cifra infravalora notablemente el número real de víctimas puesto que la Misión tuvo muy restringido el acceso al interior del país. También se produjo un notable incremento en el número de violaciones políticamente motivadas: de enero a junio, la MICIVIH recibió informes de setenta y seis casos. La pauta habitual, según la Misión, era bastante simple: cuando un grupo de hombres armados, casi siempre militares y miembros del FRAPH, irrumpían en la vivienda de un activista político, si no lo encontraban, violaban a su esposa, a su hermana, a su hija o a su prima. Era inusual que las víctimas acudieran a la policía para denunciar una violación porque corrían el riesgo de ser violadas nuevamente o de que les propinaran una paliza. Además, en Haití persisten tabúes que dificultan notablemente a las mujeres la denuncia de este tipo de agresiones. Aún así, hubo unos pocos casos en que fue denunciada una agresión sexual y se consiguió un veredicto de culpabilidad. Por ejemplo, la Misión documentó el caso de una muchacha de trece años que fue violada por un cabo en un puesto del ejército. Las autoridades militares intentaron descartar la violación argumentando que la muchacha no era virgen. Sin embargo, finalmente, el cabo fue sancionado: diez días de arresto⁴⁰.

Entretanto, la administración estadounidense se esforzaba en el encubrimiento de las atrocidades que cometían sus aliados políticos haitianos. El Informe sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado, publicado el 1 de febrero de 1994, omitió incluir los datos relativos al fuerte incremento en la violencia política que se produjo a partir de septiembre de 1993. También ignoró las pruebas disponibles para imputar al ejército la responsabilidad de algunas de las violaciones de derechos humanos mencionadas en el informe.

En abril de 1994, la embajada de Estados Unidos en Puerto Príncipe envió un informe de once páginas al secretario de Estado y a otros altos funcionarios. El informe fue escrito por la funcionaria de derechos humanos, Ellen Cosgrove, fue revisado por Luis Moreno, el coordinador del programa de refugiados, y lo firmó el embajador William Swing. Se filtró a la prensa a comienzos del mes de mayo. Si bien reconocía un incremento en las violaciones de los derechos humanos, sostenía que la situación no era tan mala como aseguraban Aristide y sus defensores: «La izquierda

⁴⁰ Amnistía Internacional, *Haití. Entre la espada y la pared...*, p. 8; Lawyers Committee for Human Rights, *op. cit.*, p. 133; Human Rights Watch/Americas, National Coalition for Haitian Refugees, *Rape in Haiti. A Weapon of Terror*, HRW/A, NCHR, Washington, D. C., 1994, pp. 6, 12 y 19.

haitiana, incluyendo al presidente Aristide y a sus partidarios en Washington y aquí, manipulan consistentemente, o incluso inventan, violaciones de derechos humanos como una herramienta de propaganda, consciente o inconscientemente asistidos, en este esfuerzo, por ONGs de derechos humanos y por [MICIVIH]»⁴¹. El informe también se refería al aumento en el número de violaciones: «Por una variedad de razones culturales (no agradables de contemplar), la violación nunca ha sido considerada como un delito serio aquí». El problema consistía en que se intentaba hacer una comparación con Bosnia: «Sospechamos francamente, del repentino alto número de violaciones denunciadas, particularmente en esta cultura, que ocurren al mismo tiempo en que los activistas de Aristide buscan trazar una comparación entre Haití y Bosnia»⁴².

Durante los primeros meses de 1994, las autoridades estadounidenses, secundadas por la ONU, presionaron a favor de un acuerdo aún más perjudicial para el sector democrático haitiano que el firmado en la Isla de los Gobernadores. En enero, Pezzullo responsabilizaba por igual al gobierno constitucional y a los militares del estancamiento que sufrían las negociaciones: «Aparte de los esfuerzos deliberados para frustrar la ejecución del acuerdo alcanzado, hemos notado una reluctancia a proseguir arraigada en los temores profundamente asentados de todas las partes, al actuar sin alguna garantía de que los otros actores políticos cumplirían con sus obligaciones. Como resultado de esos temores, la implementación está paralizada. Romper esta parálisis requiere verdadera reconciliación y construir la confianza mutua, quizá reiniciando el proceso a través de una serie de pasos simultáneos»⁴³.

En febrero se inició el esfuerzo para «construir la confianza mutua». Una delegación parlamentaria haitiana viajó a Washington invitada por una institución financiada por la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos: el Centro para la Democracia. Los parlamentarios propusieron el nombramiento de un nuevo primer ministro, la promulgación de una ley de amnistía que entrara en vigor antes de la dimisión de Cédras y el levantamiento del embargo. Ni estipulaba fecha alguna para el retorno de Aristide, ni contemplaba el despliegue de una fuerza de la ONU como garantía del proceso, ni preveía sanciones en caso de un nuevo incumpli-

⁴¹ Reproducido en Lawyers Committee for Human Rights, *op. cit.*, p. 78.

⁴² Embajada de EE.UU. en Haití, «Haiti Human Rights Report», en J. Ridgeway, ed., *The Haiti Files. Decoding the Crisis*, Essential Books, Washington, D. C., 1994, pp. 186-7.

⁴³ Citado en Lawyers Committee for Human Rights, *op. cit.*, pp. 125-6.

miento por parte de los militares. El secretario de Estado, Warren Christopher, apoyó el plan de los parlamentarios «centristas» e indicó que cualquier endurecimiento del embargo dependería de la aceptación del plan por parte de Aristide. El secretario general de la ONU, Boutros-Ghali, declaró que el plan era un «desarrollo significativo» para salir de la crisis. Caputo también expresó su apoyo a la nueva propuesta. Entonces Aristide ofreció una alternativa al plan parlamentario que suponía la reactivación del Acuerdo de la Isla de los Gobernadores. Ahora se veía obligado a proponer y defender el acuerdo que firmó en julio bajo fuertes presiones. De cualquier modo, Aristide rechazó rotundamente la nueva propuesta y fue criticado por su intransigencia.

El 2 de marzo de 1994, el Congreso haitiano aprobó el plan parlamentario presentado en Washington. La embajada estadounidense publicó una nota expresando su satisfacción por la postura de los diputados. Pero, seis días más tarde, Pezzullo compareció ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense y afirmó que el plan parlamentario haitiano había sido elaborado por el Departamento de Estado. Añadió que se canalizaron fondos a través del Centro para la Democracia con el propósito de costear los gastos de la delegación haitiana que viajó a Washington y que la delegación había sido escogida por el embajador de Estados Unidos en Haití⁴⁴. Esto mostraba, una vez más, que la Casa Blanca defendía las metas de los golpistas. Con posterioridad, sería posible defender las metas de los golpistas sin tener que defender también a los golpistas. Ese sería el momento en que periodistas, políticos y científicos sociales detectarían lo que ellos denominan *democracia*.

Por lo pronto, había llegado el momento oportuno para la búsqueda de una solución al problema haitiano. Había que buscar una solución al problema porque estaba molestando. Y estaba molestando por cuatro motivos. Primero, porque los golpistas nunca lograron consolidarse en el poder y sólo eran capaces de subsistir a base de represión. Segundo, el grupo negro del Congreso presionaba para que la cuestión haitiana no cayera en el olvido y para que fuera resuelta. Tercero, el flujo de refugiados proveniente de Haití creaba problemas en el estado de Florida. Y, cuarto, Washington quería mostrar a Cuba como la única dictadura del Hemisferio Occidental.

Cualquier solución a la crisis haitiana debía impedir que el embargo provocara la caída del régimen ilegítimo porque en tal caso se produciría

⁴⁴ Haitian Information Bureau, *op. cit.*, pp. 234-9; William Blum, *Killing Hope. U. S. Military and CIA Intervention since World War II*, Common Courage Press, Monroe (Maine), 1995, p. 378; *Haiti Info*, 27, 3, 1994; 13, 3, 1994 y 2, 7, 1994.

un vacío de poder que quizá ocupara el sector democrático. Y habría sido un precedente peligroso: Estados Unidos y la ONU desalojando del poder a un sector de una élite americana aliado a Washington, no para entregar el poder a otro sector de la misma élite, sino a un amplio movimiento democrático. Así pues, era preciso desplazarse a Haití para no perder el control mientras se dismantelaba el viejo aparato de seguridad y se ponía en funcionamiento uno nuevo. Esta lógica condujo a la invasión de septiembre de 1994.

Las presiones para hallar solución al problema haitiano aumentaron en marzo. El grupo negro del Congreso pidió un endurecimiento de las sanciones contra Haití, el cese en la repatriación de refugiados y la adopción de medidas que garantizaran el regreso de Aristide. A las exigencias formuladas por esos congresistas se sumó el grupo «Artistas por la democracia en Haití» —entre cuyos miembros se encontraban el músico Sting y la actriz Julia Roberts— en el curso de una multitudinaria rueda de prensa. Poco después, el presidente haitiano envió una carta a la administración estadounidense en la que anunciaba la suspensión del tratado de repatriaciones firmado en 1981 por Reagan y Duvalier. Así que, en un plazo de seis meses, supuestamente se haría ilegal para el gobierno de Estados Unidos la recogida de haitianos en el mar y su posterior repatriación. Esto es lo que la Casa Blanca había estado haciendo desde el inicio del régimen de Cédras. Se trata de un problema que merece una breve digresión.

El 4 de octubre de 1991, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA instó a la Administración Bush a «suspender su política de interdicción de los nacionales haitianos que están intentando buscar asilo en los Estados Unidos»⁴⁵, debido al peligro que corrían sus vidas. En noviembre, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) pidió a la administración estadounidense el traslado de los haitianos interceptados por la Guardia Costera a los Estados Unidos para determinar si podían obtener el estatuto de refugiados. A los pocos días, más de quinientos haitianos fueron desembarcados por la Guardia Costera en Puerto Príncipe. Esto hizo que los defensores de los derechos de los refugiados en Estados Unidos presentaran un pleito legal contra la decisión del gobierno. Si bien un juez de Florida ordenó detener las repatriaciones, la Administración Bush recurrió la medida por temor a un éxodo masivo de haitianos que podría perjudicar al presidente en su campaña para la reelección. De cualquier modo, los haitianos interceptados en aguas

⁴⁵ Citada en Bill Frelick, «Haitians at Sea: Asylum Denied», *NACLA. Report on the Americas*, julio de 1992, p. 35.

internacionales estaban siendo trasladados a la base militar estadounidense de Guantánamo, en Cuba. Allí fueron entrevistados con el fin de establecer si los motivos aducidos para la obtención del estatuto de refugiado político merecían credibilidad. Pero carecieron de asesoramiento jurídico adecuado y del acceso a un mecanismo eficaz para la revisión de las decisiones en caso de respuesta negativa. Es más, posteriormente, Amnistía Internacional afirmó conocer los casos de varias personas que fueron víctimas de violaciones de derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, después de haber sido repatriadas desde Guantánamo.

El artículo 33 de la Convención Relativa al Estatuto de los Refugiados –incorporada al Protocolo del Refugiado que Estados Unidos ratificó en 1968– estipula que ningún estado parte expulsará o devolverá a un refugiado a territorios en donde su vida o su libertad puedan ser amenazadas por «su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión política». La Administración Bush sostuvo que la prohibición de devolver refugiados a la fuerza no era aplicable a los haitianos que huían por mar debido a que la Guardia Costera los interceptaba antes de que alcanzaran las aguas territoriales de Estados Unidos. Y, de acuerdo a la posición gubernamental, el artículo 33 sólo se aplica a refugiados dentro del estado firmante y no a los haitianos detenidos en aguas internacionales o en Guantánamo. El ACNUR cuestionó la posición oficial estadounidense indicando que el artículo 33 prohíbe la devolución de un refugiado, como quiera que sea efectuada, a los territorios en que su vida o su libertad puedan ser puestas en peligro. Este artículo señala el territorio al que *no* se puede enviar a un refugiado y no está contemplada excepción alguna en función del lugar *desde* el que es devuelto. Sin embargo, los tribunales acabaron apoyando la postura de la Casa Blanca y, a comienzos de febrero de 1992, continuaron las repatriaciones⁴⁶.

Lo esencial del problema de los refugiados consistió en que las administraciones estadounidenses lo abordaron desde una perspectiva fundamentalmente represiva. De los alrededor de setenta mil haitianos que huyeron por vía marítima de su país, durante el período del régimen militar, sólo unos doce mil tuvieron la posibilidad de acceder a un proceso completo de asilo en Estados Unidos. Así, la Casa Blanca despreciaba los avances logrados por el derecho internacional en lo relativo a los refugiados. En junio de 1993, el Tri-

⁴⁶ Amnistía Internacional, *Haití. Entre la espada y la pared...*, pp. 17-8; Bill Frelick, *op. cit.*, pp. 35 y 37; Americas Watch, National Coalition for Haitian Refugees, *Half the Story. The Skewed U. S. Monitoring of Repatriated Haitian Refugees*, AW, NCHR, Nueva York, 1992, pp. 2, 5 y 6.

bunal Supremo estadounidense decidía que ninguna ley, ni nacional ni internacional, había prohibido a los Estados Unidos la devolución de los refugiados haitianos capturados en alta mar. Esto era así aun cuando, como escribía uno de los jueces en la opinión mayoritaria, «tales acciones puedan incluso violar el espíritu» de los tratados internacionales. En respuesta al fallo judicial, el ACNUR declaró que consideraba «la decisión del Tribunal un revés al moderno derecho internacional de los refugiados que ha estado siendo desarrollado durante más de cuarenta años»⁴⁷. En suma, el éxodo marítimo de haitianos se manejó de un modo que acabaría asestando un revés al derecho internacional y, por lo demás, fue un problema que contribuyó a evitar que la crisis desatada por el golpe de estado cayera en el olvido.

Clinton anunció una mejoría en el trato hacia los solicitantes de asilo haitianos en mayo de 1994. El Consejo de Seguridad de la ONU decidió reforzar el embargo y los principales medios de comunicación se hicieron más receptivos a los informes sobre la situación de los derechos humanos en Haití. Estos eran algunos de los pasos previos necesarios para la intervención militar. Sin embargo, Aristide afirmó el 25 de junio que él «nunca, nunca, nunca» volvería a su país mediante una invasión. En una carta que había enviado tres días antes a grupos solidarios estadounidenses escribió que no tenía «la ilusión de que una intervención militar serviría al propósito de restaurar la democracia o la justicia en Haití»⁴⁸.

Pero los preparativos para la invasión ya estaban en marcha. Después del anuncio de Clinton, sobre la mejora en el trato a los refugiados, se produjo un fuerte incremento en el número de personas que huía de Haití a lo largo de los meses de junio y julio. A finales de julio, Aristide envió una carta al Consejo de Seguridad de la ONU solicitando que aprobara una intervención militar en su país. La alternativa que se le había dejado era el alargamiento del régimen de Cédras. El día 31, el Consejo de Seguridad aprobaba una resolución por la que autorizaba a los estados miembros a establecer una fuerza multinacional y al empleo de «todos los medios necesarios» para desalojar a los militares, reponer el gobierno legítimo e implementar el Acuerdo de la Isla de los Gobernadores.

Para debilitar aún más la posición de Aristide a su regreso se adoptaron algunas medidas complementarias. Una de las cuestiones negociadas fue la duración del mandato presidencial después de la etapa de los milita-

⁴⁷ Citados en Americas Watch, National Coalition for Haitian Refugees, Jesuit Refugee Service/USA, *No Port in a Storm. The Misguided Use of In-Country Refugee Processing in Haiti*, AW, NCHR, JRS/USA, Nueva York, 1993, pp. 5 y 6.

⁴⁸ *Haiti Info*, 2, 7, 1994.

res. Aunque la Constitución haitiana de 1987 prohíbe la reelección consecutiva del presidente, no dice nada sobre si el tiempo transcurrido en el exilio debe computarse como parte del mandato constitucional. Aristide consideró que los tres años de suspensión del orden constitucional no debían ser contabilizados como parte de su mandato. De ese modo, su presidencia debía ser alargada durante un período equivalente al de la duración del gobierno militar. La administración estadounidense se opuso por completo: Aristide tendría que abandonar el cargo en la fecha prevista. Clinton, al insistir en que se computaran los años de Cédras en el poder como mandato constitucional, le otorgaba un sello de legitimidad a los golpistas.

La Casa Blanca también exigió que Aristide renunciara a su proyecto económico si quería el apoyo de Washington para su retorno. En agosto de 1994, los representantes del gobierno constitucional se reunieron en París con miembros del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos (USAID) y de otras organizaciones de ayuda. El gobierno haitiano recibiría financiación sólo si adoptaba un programa de ajuste estructural opuesto al programa económico que llevó a Aristide a la presidencia. Esto se concretó, en enero de 1995, cuando el nuevo primer ministro haitiano presentó a los donantes internacionales un plan detallado que incluía la privatización de nueve empresas estatales, la eliminación de aranceles y el despido del 50% de los empleados públicos⁴⁹. La derrota era tan completa que hasta el director de USAID, Brian Atwood, escribió favorablemente de la política económica del gobierno legítimo. Atwood encontró en Aristide a un líder que «se propone privatizar las firmas propiedad del estado, crear mercados de capital y barreras comerciales más bajas». El presidente de Haití disponía de un «bien informado plan de transición que tiene el completo apoyo de la comunidad internacional»⁵⁰. Atwood elogió el plan de ajuste estructural porque era un certificado de defunción para cualquier propósito de ejercer soberanía en asuntos económicos.

Y ejercer soberanía en asuntos económicos era precisamente lo que se había intentado durante los siete meses de administración democrática. Cuando el gobierno de Aristide había propuesto un aumento salarial se encontró con la oposición de USAID. En junio de 1991, un informe encar-

⁴⁹ Kim Ives, «The Second U. S. Occupation», *NACLA. Report on the Americas*, enero-febrero de 1995, pp. 6-8; Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, *Resolución 940*, 31 de julio de 1994; Patrick Costello, José Antonio Sanahuja, «Haití: los desafíos de la reconstrucción», en Mariano Aguirre, ed., *Anuario del CIP 1996*, Icaria Editorial, Barcelona, 1996, pp. 207-8.

⁵⁰ J. B. Atwood, «Haiti: Serving Haitians and the U. S. National Interest», *International Herald Tribune*, 17, 10, 1994.

gado por USAID explicaba que el futuro del país estaba siendo puesto en peligro por «el nuevo proyecto de ley de salarios» que «se espera que reduzca la competitividad general de Haití»⁵¹. El sueldo mínimo haitiano por una jornada laboral de ocho horas era de 1.76 dólares. Esto equivalía a 22 céntimos a la hora. Si las reformas propuestas por Aristide hubieran tenido éxito el salario mínimo habría alcanzado 37 céntimos por hora, 2.94 dólares al día. Si, además, se conseguía que las empresas abonaran las prestaciones de salud y pensiones, el sueldo aumentaría a 4.03 dólares diarios, unos 50 céntimos a la hora. Aunque este salario no habría alcanzado ni la undécima parte del sueldo promedio pagado por un trabajo similar en Estados Unidos (5.85 dólares a la hora), USAID se opuso al incremento. La agencia del gobierno estadounidense explicó que «los sistemas de salarios no deberían ser el foro para el bienestar y los programas sociales». El gobierno haitiano debía comprender que «Haití tiene ventaja comparativa en su ubicación y en su fuerza de trabajo de bajo coste, muy productiva»⁵².

La administración democrática no sólo se opuso a la ortodoxia económica reinante en la región caribeña con su propuesta para mejorar las condiciones laborales. También desautorizó la política de privatizaciones a causa de las rápidas mejoras logradas en la empresa pública: de febrero a mayo de 1991, la fábrica de cemento propiedad del Estado dejó atrás unas pérdidas de 4.5 millones de gourdes y logró unos beneficios de 100.000 gourdes; la empresa pública productora de harina pasó de unas pérdidas de casi 3 millones de gourdes a un millón de gourdes en beneficios. También la compañía nacional de electricidad redujo sus pérdidas y tenía previsto obtener beneficios ese mismo año. Sin embargo, los golpistas arruinaron la empresa pública. Por ejemplo, en el caso de la compañía de electricidad los militares sumaron tres mil de sus cómplices a una nómina de mil trabajadores y vendieron combustible destinado a las turbinas, robaron los fondos de pensiones y una parte del parque de vehículos. De este modo, entre 1991 y 1994, mientras que el régimen de Cédras dejaba al Estado sin recursos para oponerse a las privatizaciones exigidas por los proveedores de ayuda económica, el producto interior bruto caía un 25% y las condiciones de vida empeoraban notablemente⁵³.

Esta realidad impidió que la democracia haitiana se convirtiera en un problema para el modelo económico reinante en la región caribeña. El

⁵¹ Citada en National Labor Committee, *op. cit.*, p. 26.

⁵² Citada en National Labor Committee, *op. cit.*, p. 22.

⁵³ National Labor Committee, *op. cit.*, pp. 21-2, 27 y 35-6; Laurie Richardson, Jean-Roland Chery, «Haiti's Not For Sale... Yet», *Covert Action Quarterly*, invierno de 1995-6,

gobierno de Aristide había conseguido mejoras en sus servicios gracias a que desafió la ortodoxia económica prevaleciente⁵⁴. Pero si Haití lograba mejorar el nivel de vida de su ciudadanía gracias, entre otras razones, a que rechazaba la privatización de las empresas de titularidad pública y a que incrementaba sus costes salariales, ¿por qué no iban a poder hacer lo mismo sus vecinos? El alcance del efecto ejemplar de políticas económicas heterodoxas con éxito nunca debe ser subestimado.

5. LLEGAN LOS MARINES

A la Administración Clinton sólo le quedaba un obstáculo para emprender la invasión de Haití: las encuestas reflejaban la oposición mayoritaria del pueblo estadounidense a la intervención armada. El propio

pp. 32-4; *Haiti Info*, 27, 3, 1994 y 30, 9, 1995; Naciones Unidas, *Estudio económico y social mundial 1996. Tendencias y políticas en la economía mundial*, Naciones Unidas, Nueva York, 1996, p. 195.

⁵⁴ Quizá el logro más importante del breve experimento democrático haitiano fue la mejora conseguida en el respeto a los derechos humanos descrita anteriormente. La ayuda internacional pactada por el gobierno de Aristide reducía la dependencia de los Estados Unidos. Para empezar, la legitimidad de la nueva administración garantizaba a los donantes internacionales de ayuda económica que sus fondos no serían malversados. La comunidad internacional había comprometido, para el año fiscal de 1989, una ayuda de 206 millones de dólares y, en 1990, la cantidad equivalente fue de 241 millones. Durante los siete meses del gobierno de Aristide, la ayuda económica internacional comprometida ascendió a 511 millones de dólares. La parte estadounidense en la financiación externa de la economía haitiana se redujo. Si, en 1989, unos 110 millones de dólares no procedían de Estados Unidos –y, en 1990, unos 150 millones- la cantidad equivalente sobrepasaba los 400 millones en el monto total de la asistencia económica negociada por la administración de Aristide. La negociación se llevó a cabo en París durante el mes de julio de 1991. Los 511 millones de dólares, equivalentes al 25% del producto nacional bruto, suponían un importante aumento en la cuantía de la ayuda y diversificar las fuentes de financiación.

Si bien la administración democrática se encontró con una economía que, según el Banco Interamericano de Desarrollo, se hallaba «en un estado de desintegración sin precedentes», en tan sólo siete meses logró avances significativos. El nuevo gobierno había reducido la deuda externa en 130 millones de dólares y había incrementado sus reservas de divisas, prácticamente inexistentes, hasta alcanzar los 12 millones de dólares. Los ingresos gubernamentales aumentaron debido a las mejoras logradas en el cobro de impuestos y a la campaña emprendida contra la corrupción. La tasa de inflación pasó del 26% en diciembre de 1990 al 11% en agosto de 1991 (Center for International Policy, *Mobilizing Resources for Development. A Retrospect on President Aristide's Economic Strategy for Haiti and His Administration's Record with Aid Donors*, Center for International Policy, Washington, D. C., 1992, 1-5; National Labor Committee, *op. cit.*, pp. 35-6).

Clinton afirmó que se daba cuenta de que la invasión era impopular: «Sé que el momento es impopular. Sé que toda esta operación es impopular. Pero creo que es lo que hay que hacer. Creo que cuando el pueblo norteamericano conozca los hechos la apoyará»⁵⁵. Que el pueblo estadounidense no apoyara la intervención era un asunto irrelevante: los principios son los principios. El consejero nacional de seguridad, Anthony Lake, indicó que se trataba de una «prueba decisiva» del compromiso de Estados Unidos con la democracia en Latinoamérica. Warren Christopher, el secretario de Estado, declaró que dejar a los militares en el poder sería «enviar un mensaje incorrecto» al resto de la región. Además, como había señalado el jefe de gabinete de la Casa Blanca, «el pueblo estadounidense siempre se une detrás de su presidente cuando toma una acción» como la que iba a emprender en Haití⁵⁶.

El 14 de septiembre, el presidente se reunió con los periodistas, provisto de gráficas y de fotos en blanco y negro, para explicar las atrocidades cometidas por los militares contra muchos de sus compatriotas. «Este es claramente el régimen más brutal, el más violento, de cualquier lugar de nuestro hemisferio». Los militares, prosiguió el presidente, «han establecido un reino del terror en Haití y está empeorando». Un día antes, el Departamento de Estado había publicado un informe sobre los derechos humanos en Haití que reflejaba fielmente los abusos contra la población e imputaba la responsabilidad a los militares. El día 15, Clinton se dirigió al país a través de la televisión: «Cédras y sus criminales armados han dirigido un reino del terror. Ejecutando niños, violando mujeres, matando sacerdotes». Clinton afirmó que los militares se hacían más violentos a medida que aumentaba su desesperación. Habló de huérfanos asesinados, de muchachas de trece y dieciséis años violadas por miembros de las fuerzas de seguridad, de personas apuñaladas y mutiladas, cuyos restos fueron dejados como terroríficas advertencias a otras personas. «Déjenme ser claro: el general Cédras y sus cómplices solos son responsables de este sufrimiento y de esta terrible tragedia humana. Son sus acciones las que han aislado a Haití»⁵⁷. Esta vez la Administración Clinton no repartió culpas entre los militares y la «intransigencia» de Aristide. Asimismo, dejó muy claro que conocía las actividades de sus protegidos en Puerto Príncipe. No obstante, prefirieron buscarles un exilio de lujo antes que, por ejemplo, procesarles por su involucración en el tráfico de narcóticos hacia Estados

⁵⁵ *El País*, 16, 9, 1994.

⁵⁶ Citados en *El País*, 14, 9, 1994.

⁵⁷ *Haiti Info*, 23, 9, 1994.

Unidos, como se había hecho anteriormente con Noriega. Después del discurso de Clinton, las encuestas reflejaron un apoyo mayoritario del pueblo estadounidense a la intervención militar.

El 17 de septiembre llegó a Puerto Príncipe una delegación encabezada por el ex presidente Jimmy Carter. Le acompañaban el general Colin Powell, el senador Sam Nunn y Robert Pastor, antiguo especialista de Carter en Latinoamérica. La Casa Blanca les envió para ultimar las negociaciones con los militares haitianos relativas a la invasión y al retiro de algunos líderes golpistas. Los enviados estadounidenses firmaron el Acuerdo de Puerto Príncipe con las autoridades *de facto*. El acuerdo se proponía «evitar la violencia y el derramamiento de sangre, promover la libertad y la democracia», así como establecer una buena relación entre los dos países. «Para implementar este Acuerdo, los militares haitianos y las fuerzas de policía trabajarán en estrecha colaboración con la Misión Militar de EE. UU.» La colaboración se prolongaría durante el período transicional necesario para asegurar las instituciones vitales del país. «Las actividades militares de la Misión Militar de EE. UU. serán coordinadas con el alto mando militar haitiano»⁵⁸. En síntesis, el acuerdo regulaba la cooperación de los «invadidos» con los invasores para que todo saliera bien. Por otra parte, entrañaba alguna ambigüedad adicional con respecto a lo establecido por la ONU con el objetivo verosímil de contar con un amplio margen político de maniobra durante la ocupación.

La invasión la encabezaba un ejército comprometido en el apoyo y en el adiestramiento previo del ejército que había provocado la intervención militar⁵⁹. Las instituciones armadas de Haití no habían dejado de comportarse a

⁵⁸ *Haiti Info*, 23, 9, 1994.

⁵⁹ Entre 1950 y 1977, los gobiernos estadounidenses suministraron unos 3.4 millones de dólares en ayuda militar. Además, adiestraron a 610 oficiales haitianos en EE. UU. En torno a 1980, el ejército de Haití contaba con unos 7.000 miembros. A fines de 1971, el Departamento de Defensa había gestionado el adiestramiento de una fuerza de contrainsurgencia haitiana denominada «Los leopardos». Posteriormente, Israel se encargó del entrenamiento de esa unidad militar de élite. Los israelíes mandaron instructores a Puerto Príncipe que contribuyeron al mantenimiento de la «seguridad interior». El gobierno israelí también suministró armas a la dictadura de Duvalier. En realidad, los gobiernos de EE. UU. utilizaron a Israel, el país que más ayuda exterior estadounidense recibe, para apoyar a los militares haitianos eludiendo potenciales obstáculos por parte del Congreso.

A comienzos de los años ochenta, EE. UU. financió un programa de ventas militares para Haití que alcanzó unos 300.000 dólares anuales. También gastaron entre 150.000 y 250.000 dólares por año, de 1980 a 1985, en el adiestramiento de militares haitianos. Durante los dos últimos años del régimen de Jean-Claude Duvalier, las ventas de equipo militar aumentaron sustancialmente y, en 1985, alcanzaron 3.2 millones de dólares. Se tra-

lo largo de los años como lo hubiera hecho un ejército invasor. Esta realidad la expresó el oficial haitiano que había señalado el conflicto que explicaba la razón de ser del FRAPH: «7.000 de nosotros contra 7 millones de civiles». En realidad, como se afirmó anteriormente, la fuerza invasora se desplazó a Haití con el fin de garantizar la reestructuración del aparato de seguridad haitiano. Esa reestructuración estaría supervisada por una fuerza ocupante extranjera que vigilaría al sector democrático y así permitiría a la élite haitiana seguir controlando su país gracias a la ayuda estadounidense.

El control de Haití ha sido un objetivo de la política exterior de Estados Unidos de largo alcance. Esa política benefició siempre a la élite. Una vez más, con la ocupación de 1994, ganó la élite. Como señaló Louis Kernisan –agregado de la Agencia de Inteligencia de Defensa en Haití de 1989 a 1991 y uno de los planificadores de la invasión–, «vas a acabar tratando con las mismas familias de antes, las cinco familias que dirigen el país, los militares y la burguesía». Kernisan explicó por qué acabarían tratando con la élite y, además, se refirió a Aristide y al barrio capitalino que le apoyaba firmemente: «Siempre vas a acabar tratando con ellos porque hablan tu lengua, comprenden tu sistema, han sido educados en tu país. No va a ser con el pandillero de Cité Soleil. Lo mejor que puedes esperar de él es probablemente [que te diga]: “Oh, te ayudaré a descargar tu camión”. Porque eso es todo lo que él es capaz de hacer»⁶⁰.

Un día antes del inicio de la intervención militar, una información de agencia reveló que apenas hubo embargo de petróleo en los años previos. La compañía Texaco había sido autorizada a suministrar petróleo durante el supuesto embargo. Se le había indicado que violar la directiva presidencial que prohibía el suministro de petróleo a Haití era ilegal, pero podría hacerlo y no sería ni procesada ni sancionada. Texaco consultó con el Departamento del Tesoro si sería correcto eludir el embargo afirmando que las

tó, sobre todo, de material para reprimir multitudes. Tras la caída de Duvalier, Washington envió nuevamente equipamiento «no letal» para el control de muchedumbres.

El líder de los militares golpistas, el teniente general Raoul Cédras, había sido informante de los servicios de espionaje estadounidenses. No hay razones para considerar al ejército haitiano como una fuerza independiente de Washington. El propio Cédras explicó que el «75 por ciento de nuestro personal es entrenado en EE. UU.» (Georges A. Fauriol, «The Military and Politics in Haiti», en G. A. Fauriol, ed., *op. cit.*, pp. 30-1; G. A. Fauriol, «U. S. Policy and the Ouster of Duvalier», en G. A. Fauriol, *op. cit.*, p. 52; Benjamín Beit-Hallahmi, *Israel Connection*, Ediciones B, Barcelona, 1988, p. 95; Blum, *op. cit.*, p. 370; Robert Maguire y otros, *Haiti Held Hostage: International Responses to the Quest for Nationhood 1986-1996*, Thomas J. Watson Jr. Institute for International Studies, Providence, 1996, p. 26; Christopher Hitchens, «Minority Report», *The Nation*, 8, 11, 1993, p. 522).

⁶⁰ Citado en Allan Nairn, «*Occupation Haiti...*», p. 348.

entregas de petróleo las hacía alguna filial. El Departamento del Tesoro respondió que eso sería ilegal pero que podían seguir vendiendo petróleo y no les pasaría nada. La filtración, confirmada posteriormente, provino del Departamento de Justicia e indicaba que los permisos para los suministros ilegales se dieron bajo los gobiernos de Bush y de Clinton. Los medios de comunicación ocultaron por completo esta información que implícitamente cuestionaba tanto la legitimidad como la legalidad de una intervención militar que no estuvo precedida de un verdadero embargo⁶¹. La importancia y las consecuencias de un embargo real ya habían sido puestas de relieve por Ben Dupuy, embajador itinerante de Aristide: «Si los Estados Unidos eran sinceros en su oposición al golpe, habría sido fácil librarse de los militares haciendo cumplir el embargo de Naciones Unidas. Si Haití no recibía petróleo durante uno o dos meses, eso sería el fin. Todo se estancaría. Pero eso habría significado una victoria para las masas, una victoria para Aristide. Y muy probablemente la oligarquía habría perdido por completo. Habría significado restaurar a Aristide incluso con más poder que antes»⁶².

El 19 de septiembre comenzó la ocupación de la república caribeña. El objetivo más importante de la intervención estadounidense fue el movimiento popular. La flota de los ocupantes había sido equipada con material antidisturbios debido al temor a que se produjeran enfrentamientos con los residentes de los barrios bajos. Un oficial de Operaciones Psicológicas estadounidense afirmó que se proponían asegurar que los haitianos «no saquen la idea de que pueden hacer lo que quieran»⁶³. Y eso fue lo que se le hizo entender a la población: algunas manifestaciones a favor del retorno de Aristide fueron reprimidas con gran dureza ante la indiferencia de los miembros de la fuerza ocupante presentes.

A comienzos de octubre, las tropas de Estados Unidos confiscaron más de 60.000 páginas de documentos cuando asaltaron la sede del FRAPH en Puerto Príncipe. También se apropiaron de 100.000 páginas más pertenecientes a las Fuerzas Armadas. Los documentos del FRAPH incluyen «fotos trofeo» que muestran a miembros de la organización junto a gente a la que estaban torturando, a la que estaban asesinando o, simplemente, muestran cadáveres mutilados. Las acciones de las autoridades militares estadounidenses contra el grupo paramilitar incluyeron la detención de algunos de sus miembros más conocidos. El arresto de Jerry Mourra tuvo

⁶¹ Noam Chomsky, «Haiti: The “Uncivil” Society», *Covert Action Quarterly*, verano de 1996, pp. 44-5.

⁶² *NACLA. Report on the Americas*, julio-agosto, 1993, p. 14.

⁶³ Citado en Allan Nairn, «Occupation Haiti...», p. 344.

una cierta trascendencia como muestra de la voluntad estadounidense de romper sus vínculos con organizaciones criminales que actuaban en la arena política. Mourra, que durante mucho tiempo fue armero y ayudante de Michel François, fue encarcelado por la fuerza de ocupación de Estados Unidos y permaneció cinco meses preso. Posteriormente explicó que su arresto fue un paréntesis en una larga relación con «buenos amigos» de Washington. Contó haber ido a pescar y a cazar, durante los años ochenta, con gente de la CIA asignada a la embajada y haber sido presentado a John Kambourian, el jefe de estación de la CIA en Haití, a mediados de 1994. Mourra recibió una visita «directa de Washington», a comienzos de 1995, mientras aún estaba en la cárcel: el general John Sheehan. Según relató a Allan Nairn, Sheehan «era un buen tipo», pero «no puedo contarle lo que me dijo»⁶⁴. También afirmó que había reanudado sus vínculos con la inteligencia militar estadounidense. En su opinión, Haití necesitaba a las fuerzas de su poderoso vecino para controlar a la «clase baja».

Para Emmanuel Constant, el líder del FRAPH, los arrestos iniciales llevados a cabo contra destacados miembros de su organización se hicieron «por publicidad». Algunos fueron liberados poco después de la detención y se les indicó que habían sido arrestados por error. El antiguo jefe de las Fuerzas Especiales en Haití, el general Dick Potter, recordó que mucha de la gente arrestada por su colaboración con el aparato represivo luego era puesta en libertad. Potter supuso que se les dejaba en libertad debido a la «escasa evidencia» disponible. Pero, según indicó, tales decisiones se tomaban a un nivel más elevado. Algunos testimonios adicionales sugieren que Washington seguía apoyando al FRAPH: un jefe de operaciones de los Boinas Verdes recordó haber sido instruido para mantenerse alejado del FRAPH; su colega Mark Boyatt, coronel de los Boinas Verdes, afirmó que inicialmente estuvieron buscando armas del grupo paramilitar haitiano pero que, debido a una orden proveniente del Pentágono, pronto se les indicó que consideraran al FRAPH como la «leal oposición». Por último, el testimonio de un soldado estadounidense que estuvo en Haití durante los tres primeros meses de la ocupación también encaja con lo anterior: Stan Sagoff participó en la detención de tres prominentes miembros del FRAPH. Uno de ellos fue liberado en el plazo de un día, otro quedó en libertad a las tres semanas y el tercero permaneció en la cárcel porque prefería no arriesgarse a un reencuentro con sus antiguas víctimas⁶⁵.

⁶⁴ Citado en Allan Nairn, «Haiti Under...», p. 15.

⁶⁵ Allan Nairn, «Occupation Haiti...», pp. 344-8; *El País*, 21, 9, 1994; *Haiti Info*, 8, 10, 1994; *El País*, 4, 10, 1994; Allan Nairn, «Haiti Under Cloak», *The Nation*, 26, 2, 1996,

El 4 de octubre, un día después del asalto a la sede del FRAPH, Michel François, el jefe de la policía que participó en la represión y en actividades de narcotráfico con el cártel de Medellín durante los años ochenta, huyó del país. Según un informe del Senado de los Estados Unidos, a lo largo de los años anteriores a la ocupación, los narcotraficantes colombianos habían estado pagando unos cien millones de dólares anuales a Michel François⁶⁶. «Entre el deshonor y la retirada», escribió François en una carta que envió a Cédras desde la República Dominicana, «he escogido esta última con la esperanza de que sirva a la causa de la paz en Haití». En la carta, además de renunciar a su cargo, se refirió a la fecha del golpe de estado y criticó la «perversión de los ideales del 30 de septiembre»⁶⁷, una ocurrencia que Al Capone habría sabido apreciar.

Después de la incursión contra la sede del FRAPH y de la huida del jefe de policía, los funcionarios estadounidenses le organizaron una conferencia de prensa a Emmanuel Constant en la embajada de Estados Unidos. Constant declaró que el FRAPH entregaría sus armas, daría la bienvenida al retorno del presidente y trabajaría a favor de la «reconciliación». Cuando se le preguntó al portavoz de la embajada, Stanley Schrager, cómo era posible que anteriormente otorgara los calificativos de «terrorista» y «anti-democrático» al FRAPH y luego le organizara un encuentro con la prensa, Schrager respondió: «La vida es extraña, ¿o no? Las cosas cambian constantemente»⁶⁸. Pero la idea de usar a Constant como contrapeso al sector democrático acabó siendo desechada. El líder del FRAPH huyó de Haití dos meses más tarde y entró en Estados Unidos con una visa turística que, según las autoridades, se le concedió por error. En mayo de 1995 fue encarcelado en Estados Unidos. Las cosas volvieron a cambiar para Schrager: afirmó que el FRAPH era «una organización ilegal y antidemocrática»⁶⁹.

El último paso importante hacia la «democracia», una vez aprobada la ley de amnistía, consistió en el retiro de Cédras. Las Fuerzas Armadas de Haití organizaron un acto público para despedir al militar golpista. Fue una ceremonia castrense breve que se desarrolló bajo la protección de las fuerzas ocupantes y bajo el ruido ensordecedor de miles de personas, congregadas frente al cuartel general del ejército, que abuchearon e insultaron

p. 5; *International Herald Tribune*, 29, 11, 1995; Allan Nairn, «Haiti Under the...», pp. 12-5; Stan Sagoff, *Report from a U. S. Soldier*, 17, 3, 1995, <http://www.hartford-hwp.com/archives/43/a/032.html>.

⁶⁶ Nicolas Jallot, «Haïti: plaque tournante de la drogue», *Le Point*, 28, 5, 1994, p. 30.

⁶⁷ *El País*, 6, 10, 1994.

⁶⁸ *Haiti Info*, 8, 10, 1994.

⁶⁹ *Haiti Info*, 20, 5, 1995.

incesantemente a Cédras. Tres días más tarde, un avión estadounidense le llevó al exilio en Panamá. Se había decidido que el gobierno de Estados Unidos alquilaría, por 5.000 dólares al mes, las casas de Cédras y que pagaría por adelantado un año de alquiler de la villa panameña en la que viviría el oficial haitiano. A otros oficiales comprometidos con el régimen ilegal se les destinó a diversas embajadas haitianas como agregados militares⁷⁰.

El 15 de octubre de 1994 regresó el presidente. Unos días antes, Ben Dupuy, ex embajador itinerante de Aristide, había declarado que el presidente regresaba «como un rehén de Estados Unidos para poner en marcha el plan del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, que asegura un futuro de neoliberalismo en Haití»⁷¹. El incuestionable compromiso de Aristide con los intereses de la mayoría de la población serviría para que la gente entendiera que cuanto consiguieran bajo su gobierno sería todo cuanto podrían conseguir. Chavannes Jean-Baptiste, el portavoz de la principal organización campesina de Haití y miembro del «gabinete privado» del presidente, comentó la ocupación estadounidense ante la multitud que le esperaba en una localidad del interior: «Esto no es una victoria. Este no es el camino por el que debíamos haber vuelto. No es el camino por el que Titid [Aristide] debía haber vuelto. No es una ocupación de EE.UU. lo que debía haberle devuelto [...]. No lo celebren y piensen que el ejército [de EE.UU.] está aquí para liberarnos... ¡Es parte de la misma estrategia del golpe!»⁷²

6. LA «DEMOCRACIA»

Las fuerzas ocupantes establecieron un clima de relativa seguridad durante el período en que se constituyó una nueva policía, tras el colapso y el desmantelamiento de las instituciones que previamente debieran haber velado por la seguridad ciudadana. La policía y las Fuerzas Armadas desaparecieron a raíz de las protestas masivas que se produjeron en septiembre y octubre de 1994.

La Casa Blanca había decidido desempeñar un papel clave en la creación y en el adiestramiento de la nueva fuerza policial. Se estableció un cuerpo de policía interina integrado por antiguos militares y se creó una

⁷⁰ *El País*, 11, 10, 1994 y 14, 10, 1994; *The Economist*, 22, 10, 1994; Dupuy, *op. cit.*, p. 160; *International Herald Tribune*, 25, 10, 1994.

⁷¹ Citado en J. M. Martín Médem, «Haití. ¿Bienvenido? Míster Marshall», *Hacia el Sur*, noviembre de 1994, p. 5.

⁷² *Haiti Info*, 22, 10, 1994.

academia encargada de instruir a los agentes del cuerpo policial que finalmente fue desplegado por todo el país. Los nuevos graduados fueron sustituyendo progresivamente a los integrantes de la policía interina. Sin embargo, si hubiera existido el propósito inicial de crear una fuerza de seguridad respetuosa con los derechos humanos y respetada por la población, se habría excluido a los antiguos miembros de las Fuerzas Armadas. Pero, como los ocupantes carecían de tales propósitos, las cuestiones de derechos humanos, según funcionarios estadounidenses, excluyeron a menos del 5% de los soldados no admitidos en la policía interina. William O'Neill, antiguo director legal de la MICIVIH, comentó que era difícil imaginar a soldados acostumbrados a la brutalidad propia del ejército haitiano en funciones de policía civil. Esto era evidente para la población haitiana. Tan evidente que, en algunos casos, en cuanto los residentes locales reconocieron a viejos represores con uniformes nuevos expresaron de inmediato su hostilidad. Así ocurrió en Cap Haitien, la segunda ciudad del país, cuando cientos de personas abuchearon a los nuevos policías que intentaban instalar los militares estadounidenses.

En febrero de 1995, la nueva academia de policía, dirigida por personal estadounidense, inició su funcionamiento. Los exámenes de admisión habían sido elaborados en Estados Unidos. En junio y julio salieron las dos primeras promociones que sumaron algo más de setecientos agentes. La tercera promoción viajó a Fort Leonard Wood, en Missouri, para acelerar el adiestramiento de los cadetes, de modo que el despliegue de unos seis mil agentes estuviera concluido a principios de 1996. Para entonces, Chavannes Jean-Baptiste, responsable del equipo de transición del presidente que iba a sustituir a Aristide, tenía plena conciencia de la infiltración estadounidense: «La CIA está presente dentro de la policía. Está presente en todas partes. Pero, ¿cuál es su plan? Yo no lo tengo»⁷³. En diciembre de 1995, Aristide licenciaba a los últimos agentes de la policía interina y así concluía la transición a un nuevo aparato de seguridad⁷⁴.

⁷³ Citado en Allan Nairn, «Haiti Under Cloak», p. 4.

⁷⁴ Human Rights Watch/Americas, National Coalition for Haitian Refugees, *Haiti. Security Compromised. Recycled Haitian Soldiers on the Police Front Line*, HRW/A, NCHR, Washington, D. C., 1995, pp. 2, 3, 24, 9 y 6; *Haiti Progrès*, 25-31 de enero de 1995; Lawyers Committee for Human Rights, *Warning Signs in Haiti. The Multinational Force and Prospects for the Rule of Law*, LCHR, Nueva York, 1994, pp. 11-2; Amnistía Internacional, *Haiti. A Question of Justice*, AI, Londres, 1996, pp. 4 y 5; United Nations. Security Council, *Report of the Secretary-General on the United Nations Mission in Haiti*, Security Council, Nueva York, 1995, párrafos 27 y 30.

No tiene demasiado sentido plantear como preferible la ocupación estadounidense en vez del régimen de Cédras. Limitar la solución de la crisis a tal dilema fue el objetivo de la Casa Blanca. Pero, en realidad, ¿qué sucedió? En primer lugar, el régimen de Cédras recibió el apoyo de Washington (armas para el FRAPH, incumplimiento del embargo, maniobras dilatorias, etc.). En segundo lugar, en cuanto el equipo Cédras concluyó su trabajo –aterrorizar y diezmar al movimiento democrático, arruinar la economía del país– llegaron los soldados estadounidenses y los expertos de las instituciones crediticias internacionales. Ese era el momento en que debía establecerse un aparato de seguridad que sirviera como contrapeso al sector democrático. Debía establecerse una fuerza policial razonablemente ineficiente: un cierto nivel de caos social, sumado a los años de dura represión, estimularía el sentir colectivo de impotencia y resignación en que florece la «democracia». Entre, por una parte, el alargamiento del régimen de Cédras y, por otra parte, la aceptación o no de la ocupación estadounidense, no había un dilema real. Era una nueva escenificación de una vieja fórmula que incluye dos etapas. En la primera etapa se reprime duramente a una población que queda diezmada y aterrorizada por unos años. Durante la segunda etapa se rentabiliza propagandísticamente la mejora en el respeto a los derechos humanos que se produce en cuanto una represión moderada permite controlar a la disidencia. Son las dos etapas de una misma aventura autoritaria.

Después de Cédras, la situación de los derechos humanos mejoró notablemente. Pero, en relación al gobierno democrático de 1991, empeoró notablemente. En 1995, la delincuencia aumentó un 200%. En julio, el informe del secretario general de la ONU facilitó las cifras de los asesinatos cometidos durante los meses de marzo (101), abril (79), mayo (75) y junio (63). Entre enero y octubre se cometieron unos veinte asesinatos políticos. A comienzos de 1997, Human Rights Watch acusó a la policía haitiana de haber cometido cuarenta y seis asesinatos desde que había entrado en servicio, y, según Amnistía Internacional, en 1997, la policía mató a tiros a más de veinte personas «en circunstancias controvertidas»⁷⁵. La impunidad siguió siendo la norma para las violaciones de los derechos humanos cometidas tanto en el pasado como en la nueva etapa.

El «éxito» en la política exterior haitiana de Clinton culminó con la celebración de elecciones en 1995. El partido de Aristide logró mayoría

⁷⁵ United Nation. Security Council, *op. cit.*, anexo IV; Clara James, «Haiti: The Roof Is Leaking», *Z Magazine*, junio de 1997; Amnistía Internacional, *Informe 1998. Un año de promesas rotas*, Editorial Amnistía Internacional, Madrid, 1998, p. 218.

absoluta en el Senado y en el Congreso. Sus candidatos también vencieron en el 70% de los ayuntamientos y René Préval, el aspirante a la presidencia, obtuvo el 87.9% de los sufragios⁷⁶. Aún así, las autoridades legítimas se encontraron despojadas de todo poder real en las cuestiones realmente significativas. Ahora los objetivos económicos de la dictadura debían ser llevados a cabo bajo el sello de legitimidad otorgado por la palabra *democracia*. Es más, si la «democracia» haitiana fracasa, si continúa fracasando, los partidarios de la mano dura reaparecerán, sin máscaras, y podrán ofrecer soluciones que resulten creíbles. Tanto con la «democracia» como contra ella, la élite haitiana y sus aliados foráneos han ganado la partida. Esta es la constante de esta historia. Lo demás son variables, medios cambiantes o estrategias desechables en pos de lo que sí ha sido un fin constante de los vencedores: acaparar y acrecentar el poder y la riqueza.

⁷⁶ Patrick Costello, José Antonio Sanahuja, *Haití: los desafíos de la reconstrucción*, CIP, Madrid, 1996, pp. 8 y 9.